

AMÉRICA LATINA: ¿VOLVER A EMPEZAR?

LATIN AMERICA: BEGIN TO BEGIN?

José Manuel García de la Cruz
Universidad Autónoma de Madrid
manuel.garcruz@uam.es

Ángeles Sánchez Díez
Universidad Autónoma de Madrid
angeles.sanchez@uam.es

Recibido: octubre de 2007; aceptado: enero de 2008

RESUMEN

América Latina está comenzado el siglo XXI con una situación positiva en cuanto a los equilibrios macroeconómicos, con un cierto logro en la recuperación de la soberanía sobre sus instrumentos de política pero con evidentes debilidades internas que van desde la reprimarización de sus exportaciones al mantenimiento de grandes desigualdades en los niveles de rentas, además de la permanente diversidad existente en el continente que hace difícil considerar la región como un todo relativamente homogéneo. Este hecho se puede presentar como un atractivo para plantear orientaciones diferenciadas o con propósitos de desarrollo nacional específicos en cada caso.

Palabras clave: América Latina; Modelos de desarrollo; Heterogeneidad; Retos de futuro.

ABSTRACT

Latin America started the century XXI with a positive macroeconomic balance, the recovery of sovereignty over its policy instruments but with obvious internal weaknesses. Examples include the growth of exports of natural resources or the gross disparities in the levels of income. It is expanding heterogeneity among economies so we can not speak of a homogeneous continent. This can pose as an attractive design for specific national development policies.

Keywords: Latin America; Development Models; Heterogeneity; Future Options.

Clasificación JEL: O10.

-Entrevistador a un niño de corta edad: *Y tú, ¿por qué trabajas?*

-El niño: *Porque no hay trabajo.*

(Documental "La espalda del mundo" de J. Corcuera y F. León)

Los reiterados fracasos de los modelos de desarrollo que debían llevar a la transformación de la estructura económica de América Latina –primero, la industrialización sustitutiva de importaciones y, con posterioridad, las reformas estructurales derivadas del Consenso de Washington –C.W.– (Williamson, 1990)– han hecho posible la construcción de un nuevo escenario que acertadamente ha sido denominado como el de la “política económica de lo posible” (Santiso, 2006) en el que afrontar con urgencia la superación de la pobreza y la acentuación de la desigualdad social, sin olvidar los riesgos ambientales que amenazan a la sociedad mundial.

Tras las dudas con las que finalizaron los años noventa y la debacle argentina en 2001, el comienzo del nuevo siglo ha supuesto la recuperación de ritmos positivos de crecimiento económico en América Latina (5,6% del PIB en 2006), favorecidos por el aumento de los ingresos por exportaciones (un 24% anual entre 2003 y 2006), especialmente por el incremento de los precios de las materias primas y, en algunos caso, por la recepción de remesas de emigrantes (45 millones de dólares en 2004) que crean un nuevo escenario para la región donde han de replantearse los viejos problemas de desarrollo más algunos nuevos como la distancia tecnológica, la necesidad de establecer patrones de consumo y producción medioambientalmente respetuosos, la mayor dependencia energética para algunos países, y los efectos de la desarticulación productiva y de infraestructuras nacionales y regionales.

1. LA EXPERIENCIA DEL CONSENSO DE WASHINGTON

A pesar de que hay una cierta unanimidad en reconocer que las propuestas del C.W. eran necesarias para poner fin a la década perdida, se han planteado dos problemas generales. En primer lugar, las medidas

presentadas nunca debieron interpretarse como unos nuevos mandamientos a seguir necesariamente, sino como un marco orientador que tenía como eje central el fortalecimiento del mercado frente a la intervención del Estado, la apertura externa frente al proteccionismo y la reforma del sistema fiscal y del gasto público en torno a los objetivos de crecimiento y a la atención de las necesidades básicas de la población más pobre. En segundo lugar, en la implementación de las reformas nunca se atendió a los efectos indirectos que en términos de costes sociales y exclusión produjeron y que se sumarían a los estragos económicos y sociales de la década de los 80.

La aplicación del Consenso de Washington ha tenido efectos positivos en áreas como la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal, la necesidad de la apertura y de la competencia en el mercado y tampoco se pueden negar, aunque resulten insuficientes, los avances en los indicadores sociales sobre analfabetismo, esperanza de vida o tasa de mortalidad infantil (Machinea et ál. 2005). Sin embargo, el objetivo era crecer y generar empleo, hacer competitiva a la región, crear las bases para la erradicación de la pobreza y atenuar las diferencias económicas y sociales. Esto sigue aún pendiente.

Hay que recordar que el “Consenso” se rompió rápidamente en un punto central, el relativo a los tipos de cambio y así la oportunidad de aplicar tipos de cambio intervenidos dio paso a la apuesta por las políticas extremas. Ya desde los primeros años noventa, se optó bien por tipos fijos o bien por la flotación limpia, polaridad que se fue acentuando con las crisis que han acompañado el decenio de los noventa (Bubula y Otker-Robe, 2004).

Además de las debilidades anteriormente señaladas, hubo elementos en cada uno de los pilares básicos de las reformas que deben de ser analizados.

Las economías latinoamericanas abordaron procesos intensos de apertura comercial, siendo especialmente notables en las economías mayores. Entre mediados de los años 80 y finales de los 90, el arancel nominal medio argentino se redujo del 50% al 14%, en Brasil del 80% al 13% y en México del 40% al 14% (Burky y Perry, 1997). Pero todo ello no se ha materializado en una mejora de la posición relativa de la región en el comercio mundial de mercancías (entre el 5 y el 6% del total comerciado).

En la segunda mitad de la década de los noventa se produjo un *boom* en la llegada de capital extranjero en la región, que siguió la tendencia a nivel mundial (CEPAL, 2005). La IED encontró un gran atractivo en las políticas de privatización y los procesos de fusiones y adquisiciones llevadas a cabo en la región en tanto que ofrecían oportunidades de compras de activos hasta suponer entre el 50% y 60% de la entradas de capital extranjero. Estas circunstancias fueron aprovechadas principalmente por las empresas españolas (Sánchez Díez, 2002). El agotamiento de las privatizaciones y, por lo tanto, de las oportunidades de compra explica, en gran parte, la caída de la IED a partir del año 2000. La consecuencia fue que gran parte del capital no fue destinado a la ampliación de capacidad productiva, por lo que el éxito en la atracción de IED ha de ser interpretada con cautela.

La reforma financiera fue otra de las orientaciones del Consenso de Washington con mayor incidencia en el funcionamiento de las economías latinoamericanas. Se han modificado las formas de operar de los sistemas financieros, y particularmente del sistema bancario. Se partía de una situación muy poco competitiva, con tipos de interés reales distorsionados, en algunos casos negativos, lo que favorecía el consumo suntuoso. Las reformas giraron en torno a la liberalización interna, la apertura de la cuenta de capitales y la desregulación del mercado de acciones (Stallings y Studart, 2006). El tamaño del sector financiero ha pasado del 63% del PIB al 112 % entre 1990 a 2003, pero pese a este importante crecimiento, dista aún mucho de la importancia que tiene para otras zonas en desarrollo como Asia Oriental, donde en el mismo periodo ha pasado del 141 % al 236%. En todo caso, se ha producido un modernización del sector, clave para el impulso del desarrollo nacional (De Ferranti et ál., 2004).

Aún así, el Consenso tampoco pudo evitar las crisis financieras que se sucedieron durante los años noventa, cuestionando la arquitectura financiera internacional (Sistema Monetario Europeo, 1992; México, 1994; Asia, 1997; Brasil y Rusia, 1998; Turquía, 1999; Argentina, 2001). Sin embargo, no hay dudas de que si la liberalización se hubiera producido de forma más lenta y sometida a controles prudenciales, el grado de vulnerabilidad alcanzado habría sido menor y los efectos negativos de las crisis también habrían sido menores.

La política fiscal fue extremadamente pro-cíclica y, además, el control de los déficits presupuestarios se realizó sobre la base de la reducción de la presión fiscal (en torno al 15% desde hace una década), lo que ha afectado extremadamente a la capacidad correctora de la actividad pública ante la recesión, llevando incluso al abandono de algunas políticas sociales.

El Consenso provocó una profunda revisión del papel del Estado en el desarrollo económico. Se comenzó con un profundo proceso de privatizaciones, primero en sectores manufactureros y comerciales y, posteriormente, en los servicios de utilidad pública. Además se privó de financiación a las políticas públicas, dando como resultado una importante pérdida de credibilidad en las mismas (Iglesias, 2006). Sin embargo, hay situaciones contradictorias, y los gobiernos no se deshicieron de algunos de sus activos más importantes, es el caso de los hidrocarburos donde PEMEX o PETROBRAS que nunca dejaron de ser empresas públicas.

En definitiva, no sólo hay persistentes resultados dudosos sobre los objetivos de las reformas sino que, además, no han ayudado a resolver algunas de las grandes debilidades en América Latina, como la baja tasa de ahorro, que se ha mantenido constante en torno al 20-22% del PIB durante la década de los noventa. Esta tasa de ahorro es claramente insuficiente para fomentar la inversión que requiere todo proceso de desarrollo. A modo de ejemplo, se puede citar que la tasa de ahorro se duplicó en Asia Oriental en el mismo periodo pasando del 22% en 1995 al 41% en 2003.

Pero sin duda, lo más criticable del C.W. es el escaso resultado positivo logrado en la reducción de la pobreza y la desigualdad, la cual muestra muchas caras: diferencias entre el campo y la ciudad, entre las distintas zonas urbanas con el incremento de las poblaciones y las favelas, las diferencias de oportunidades entre hombres y mujeres, indígenas, personas con estudios y sin ellos y un largo etcétera. Incluso en países considerados exitosos, como Chile, los niveles de desigualdad son aún alarmantes. Aunque si hubiera que identificar un grupo social que sistemáticamente ha sido excluido del debate sobre el desarrollo nacional en el conjunto latinoamericano, ese es el de los 60 millones de indígenas (10% de la población) (Hall y Patrinos, 2005) a los que hay que sumar una gran parte de los 150 millones de personas de origen africano. Ser indígena aumenta las probabilidades de estar en la pobreza entre un 13 y un 30% (PNUD, 2006).

Además, un efecto de las reformas fue el incremento de la vulnerabilidad de las clases medias ante las fases recesivas de los ciclos económicos, consecuencia de la creciente fragilidad de su inserción en el mercado de trabajo, así como en función de las circunstancias personales (enfermedad, por ejemplo) muy afectada por el debilitamiento de las políticas públicas. Esto ha hecho que en muchos países, sobre todo en momentos de crisis financieras, amplios sectores han llegado a situarse próximos a la línea de la pobreza o incluso que la población situada por encima de la línea de la pobreza se mantenga en una situación muy vulnerable y dependiente de los ciclos económicos.

Junto a estas críticas que afectan particularmente a los contenidos de las medidas del C.W., otras se refieren a la escasa atención prestada a los ciclos y, sobre todo, al ritmo y las formas de su aplicación, que fue muy rápida durante la primera mitad de la década de los noventa, ralentizándose después (Burki y Perry, 1997) y sin que, posteriormente, se corrigieran las deficiencias mostradas.

Un resultado del mantenimiento de la desigualdad y del deterioro de las condiciones de las clases medias ha sido la intensificación de la emigración, hasta el punto de que las remesas de emigrantes se están consolidando como una nueva e importante fuente de financiación externa de las economías latinoamericanas. América Latina y el Caribe tienen el 8% de la población mundial y, sin embargo, los más de 26 millones de emigrantes latinoamericanos suponen el 13% del total de los emigrantes del mundo en 2005. Los principales destinos son los Estados Unidos, sobre todo para los emigrantes mexicanos, seguido de España (1,7 millones de latinoamericanos) (CEPAL, 2006b) donde la comunidad más numerosa es la ecuatoriana.

El proceso migratorio puede favorecer la recuperación de cierta capacidad de acción soberana de los países latinoamericanos, en la medida que las remesas se canalicen hacia la potencialización de estrategias de articulación de la economía y la sociedad que generen, al menos a medio plazo, las condiciones para que los emigrantes regresen. En los países centroamericanos las remesas suponen más del 15% del PIB, porcentaje que es del 6% en el caso

de Ecuador, del 5% en Bolivia, del 4% en Colombia y del 2,5% en México. Se calcula que no menos del 2,5 millones de personas han salido de la pobreza gracias a las remesas (CEPAL, 2006c).

Sin embargo hay claros riesgos. Los emigrantes son, mayoritariamente, personas de clase media y media baja, que buscan mayores oportunidades de trabajo y de generación de renta en el exterior. Esto supone una importante "fuga" de personas, sin que se observe un retorno de los emigrantes. En este hecho influye esencialmente el estancamiento de los países de origen.

2. LA CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO ESCENARIO

El debate económico ha producido una importante reflexión sobre las políticas diseñadas y la práctica de las mismas, buscando los errores y tratando de aprender lecciones para el futuro. Sin embargo, los tiempos políticos son necesariamente cortos y marcados por la necesidad de mostrar resultados, mientras que los procesos de desarrollo económico y social, y más aún ambiental son largos, lo que obliga a la definición de estrategias colectivas que han de encontrarse en la definición de escenarios apoyados y respaldados por pactos sociales que faciliten procesos de inclusión y distribución de los beneficios y de los costes. La democracia (Sen, 1999) es un medio para establecer los objetivos de desarrollo, también para favorecer el aprovechamiento de las oportunidades, para robustecer las capacidades y para mejorar la calidad de las instituciones y, sobre todo, para hacer a las sociedades responsables de su destino. En la actualidad, las legislaciones están siendo revisadas con el fin de recuperar una parte de protagonismo para el Estado que lo perdió con las privatizaciones de sus empresas (Ruiz Caro, 2006).

Pese a los logros en materia de estabilidad política que se han realizado desde finales de la década de los noventa, con la finalización de las dictaduras militares en el Cono Sur, las democracias emanadas son aún frágiles. Recientemente se ha asistido a los problemas en el reconocimiento de los resultados electorales en México, pese a contar con una de las instituciones de mayor prestigio en transparencia electoral (el Instituto Federal Electoral), o a la consolidación de liderazgos de personas de dudosa reputación democrática como Hugo Chávez, que tratan de revertir el modelo económico y social mantenido en los últimos 15 años. Estas situaciones ponen de manifiesto que las democracias, presidencialistas, distan aún mucho de ser maduras, o, tal vez, que las instituciones democráticas de control del poder no son compatibles con sistemas presidencialistas, dejando ver las dificultades de transformación de la naturaleza del propio Estado en Latinoamérica, privatizado por grupos oligárquicos tradicionalmente más ocupados en sus propios intereses que en los generales de la nación (Pipitone, 1997).

No obstante, a pesar de estas cuestiones, la situación actual no ofrece signos de amenaza a los sistemas de participación, más bien al contrario, ofrecen muestras de su reforzamiento como la normalidad manifestada en los

últimos procesos electorales o en el referendun realizado en Costa Rica para la aprobación del TLC con los EE.UU.

En efecto, si bien en Chile, Brasil y Colombia se asiste a una cierta continuidad política, o los cambios en Uruguay y Perú están dentro de parámetros políticos convencionales, no ha sucedido lo mismo en México tras el desalojo del poder del PRI y menos todavía en Venezuela, desde 1999, o más recientemente en Bolivia, Ecuador o Nicaragua. La continuidad o el cambio se deben de interpretar más como resultado de conflictos de intereses inmediatos que como disputa entre alternativas ideológicas, que en los casos más radicales (Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador) están en elaboración (Touraine, 2006).

Los resultados electorales en Bolivia y Ecuador, en 2006, se deben a la mayor influencia de los indígenas. La democratización, la globalización y las presiones internacionales son algunas de las razones que pueden explicar este notable cambio y, así, durante los últimos 20 años, los electores de Bolivia o Guatemala han aumentado de manera significativa la proporción de población indígena en los parlamentos nacionales, a la vez que los pueblos y los partidos políticos indígenas han ganado elecciones municipales en toda América Latina, aunque todavía la proporción de indígenas en los cuerpos legislativos nacionales, en todos los países, sigue siendo muy inferior respecto de los no indígenas (Monreal, 2003).

Un factor que está teniendo una enorme repercusión en la configuración del escenario político y de las relaciones entre las distintas naciones es el alto ritmo de crecimiento de las economías asiáticas, muy particularmente de China y en menor medida de la India, lo que está suponiendo un incremento de la demanda mundial de productos primarios con fuerte impacto sobre sus precios.

Así, América Latina suministra más del 60% de la soja que China importa, un 80% de la harina de pescado, cerca del 60% de los despojos de aves troceados y un 45% de los vinos y las uvas (CEPAL, 2006a).

La subida de precios está beneficiando a las economías latinoamericanas exportadoras y perjudicando a las importadoras. Para las economías productoras de materias primas (petróleo o cobre, por ejemplo) el incremento de los precios de las materias primas está suponiendo una fuente de ingresos "extraordinarios". Mientras que Venezuela está realizando una política expansiva y utilizando sus recursos para financiar la articulación de una serie de alianzas políticas con base en anillos energéticos (Ruiz Caro, 2006), otros países, como Chile, mantienen los ingresos extraordinarios sin "gastar" atendiendo a la coherencia del "balance estructural del sector público" con el objetivo de no recalentar la economía y no generar presiones inflacionarias (Ciudad et ál., 2005). Sin embargo, las economías centroamericanas han sufrido un deterioro de los términos de intercambio del 14% desde 1998 hasta la actualidad, lo que supone una pérdida de 5.660 millones de dólares anuales (4,5% del PIB de la región), motivado en parte por la subida de los precios de la energía.

Los resultados financieros se han ido consolidando en los últimos años,

hasta el extremo de que la recuperación de las reservas externas pueden indicar la superación del problema de la deuda externa. Si en 2004, entre Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela, sumaban una deuda pública externa de 321.000 millones de dólares, y unas reservas de 138.000 millones de dólares, al finalizar el primer trimestre de 2007, las reservas ascienden a 260.000 millones de dólares, mientras que la deuda pública ha descendido hasta los 220.000 millones de dólares externa. Esta situación ha permitido a Brasil y a Argentina adelantar la amortización de su deuda con el Banco Mundial o la más radical decisión de Venezuela de abandonar el FMI y el Banco Mundial.

Estos hechos están abriendo una importante brecha en el conjunto de América Latina, al tiempo que están produciendo reacciones colectivas novedosas. Así, la continuidad mostrada en México, Perú, Colombia, Chile, los países centroamericanos y la República Dominicana tienen su reflejo en la apuesta por los tratados de libre comercio (TLC) con los EE.UU. es decir, por el mantenimiento de los principios fundamentales del C.W. –apertura, liberalización y desregulación– mientras que desde Venezuela se hacen propuestas alternativas de integración regional.

Con la proclamación de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez está tratando de erigirse en líder regional, empleando los recursos de la factura petrolera para fijar objetivos de integración regional sobre bases distintas, aunque presentadas como compatibles, de las propuestas del regionalismo abierto. Así, y tras su dimisión como miembro de la Comunidad Andina de Naciones, por incompatibilidad con las suscripciones de los TLC de Ecuador y Colombia con los EE.UU., y su aceptación como miembro del MERCOSUR, se ha lanzado las propuestas de creación de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), del Banco del ALBA para tal iniciativa y del Banco del Sur, para las economías sudamericanas. Con ellas, Venezuela trata de apoyar las políticas sociales en los esquemas de integración. Al ALBA se han sumado Cuba, Bolivia, Ecuador, Haití, y Nicaragua. Mientras que el convenio del Banco del Sur lo han firmado Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Se prevé la participación de Colombia, mientras que Chile será miembro observador. Se trata, en definitiva, de gestionar desde América Latina y con criterios propios los recursos financieros de la región.

Sin embargo, el horizonte no está libre de incertidumbres. Así, el bloqueo de las negociaciones de Doha (Flores Paredes, 2006) puede incidir negativamente sobre el crecimiento económico, al afectar a las relaciones comerciales Norte-Sur. Esta situación no solamente no favorece a las economías más directamente afectadas (los exportadores de alimentos, principalmente), sino que también da argumentos a los sectores oligárquicos que justifican el proteccionismo comercial de las economías más industrializadas para protegerse ellos mismos de la competencia internacional, lastrando así las posibilidades de diversificación productiva, necesaria para transformar las economías latinoamericanas.

La posible reprimarización de las exportaciones latinoamericanas ante el empuje de China puede recrear el viejo esquema centro-periferia e incrementar el riesgo de deterioro de los términos de intercambio, hecho que fue punto de partida del análisis de la dependencia hecha por los padres del estructuralismo cepalino (Prebisch y Singer). También, la competencia de China en manufacturas de bajo coste están suponiendo una barrera adicional para las economías no dotadas de recursos naturales, como las centroamericanas.

En definitiva, se puede mantener que América Latina está comenzando el siglo XXI en una situación, en general, positiva en cuanto los equilibrios macroeconómicos, con logros institucionales innegables, con la recuperación de un grado de soberanía que parecía perdido en los años ochenta, pero con evidentes debilidades internas como muestra su menor crecimiento relativo respecto de otras áreas y particularmente Oriente, con riesgo de regresar a modelos de inserción internacional más propios del correspondiente a la primera parte del siglo XX (primario exportador), y con una elevada diversificación en las situaciones nacionales que hacen muy difícil considerar a la región como un todo relativamente homogéneo, lo que tiene el atractivo de la oportunidad de poner en marcha orientaciones diferenciadas o con propósitos de desarrollo nacional específicos en cada caso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bubula, A. y Otker-Robe, I. (2004): "En defensa de la bipolaridad", *Finanzas y Desarrollo*, 41 (1), 32-35.
- Burki, S. J. y Perry, G. (1997): *The Long March*, Banco Mundial, Washington.
- CEPAL (2005): *La inversión extranjera en América Latina y el Caribe: Informe 2004*, Santiago de Chile.
- CEPAL (2006a): *Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2005-2006*, Santiago de Chile.
- CEPAL (2006b): *Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile.
- CEPAL (2006c). *Panorama social de América Latina 2005*, Santiago de Chile.
- Ciudad, J.C.; Lardé, J.; Rebolledo, A. y Picozzi, A. (2005): *Situación y tendencia del mercado del cobre*, CEPAL, Serie Recursos Naturales e Infraestructura, 85, Santiago de Chile.
- De Ferranti, D. et ál. (2004): *Inequality in Latin America: Breaking with History?*, Banco Mundial, Washington.
- Flores Paredes, J. (2006): "Las reformas de la Política Agrícola Común y la Ronda de Doha", *Revista de Economía Mundial*, 15, 155-177.
- Hall, G. y Patrinos, H. A. (2005): *Pueblos indígenas, desarrollo y pobreza en América Latina 1994-2004*, Banco Mundial, Washington.

- Iglesias, E. (2006): "El Papel de Estado y los paradigmas económicos en América Latina", *Revista de la CEPAL*, n° 90.
- Machinea, J. L., Bârcena, A., León, A. (coords.) (2005): *Objetivos del Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y El Caribe*, CEPAL, Santiago de Chile.
- Monreal, P. (2003): "De campesinos a indígenas: tierra y cultura en los discursos del desarrollo" en Pérez Galán, B. y Dietz, G. (eds.): *Globalización y resistencia y negociación en América Latina*, Los Libros de La Catarata, Madrid, 61-79.
- Pipitone, H. (1997): *Tres ensayos sobre desarrollo y frustración: Asia Oriental y América Latina*, CIDE-Miguel Ángel Porrúa, México.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2005): *Informe sobre el desarrollo humano, 2005. La cooperación internacional ante una encrucijada: ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual*, PNUD y Mundi-Prensa, Madrid.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2006): *Informe sobre el desarrollo humano, 2006. Más allá de la escasez: poder pobreza y la crisis mundial del agua*, PNUD y Mundi-Prensa, Madrid.
- Ruiz Caro, A. (2006): *Cooperación e integración energética en América Latina y el Caribe*, Serie Recursos Naturales e Infraestructura, 106, CEPAL, Santiago de Chile.
- Sánchez Díez, A (2002): *La internacionalización de la economía española hacia América Latina*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos, Burgos.
- Santiso, J. (2006): *La economía política de lo posible*, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington.
- Sen, A. (1999): *Desarrollo y libertad*, Ed. Planeta, Madrid.
- Stallings, B. y Studart, R. (2006): *Financiamiento para el desarrollo: América Latina desde una perspectiva comparada*. CEPAL, Santiago de Chile.
- Touraine, A. (2006): "Entre Bachelet y Evo Morales, ¿existe una izquierda en América Latina?", *Nueva Sociedad*, 205, 46-56.
- Williamson, J. (1990): *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?*, Institute for International Economics, Washington.